

Señor

JUEZ ADMINISTRATIVO ORAL DEL CIRCUITO

BUGA – VALLE DEL CAUCA

Medio de Control: Reparación Directa

Demandante: JOSÉ ALBERTO MARTÍNEZ ARIAS Y OTROS

Demandado: Nación – Rama Judicial- Consejo Superior de la
Judicatura y Nación – Fiscalía General de la Nación

JULIANA ÁLVAREZ MUÑOZ, mayor de edad y vecina de Buenaventura, identificada con cédula de ciudadanía No. 41.948.710 de Armenia – Quindío, abogada en ejercicio con Tarjeta Profesional No. 189.178 del Consejo Superior de la Judicatura, obrando de conformidad con el poder especial, amplio y suficiente que me han conferido los señores

PARIENTES DE JOSÉ ALBERTO MARTÍNEZ ARIAS

JOSÉ ALBERTO MARTÍNEZ ARIAS, identificado con cédula de ciudadanía No. 14.795.848 de Tuluá, quien actúa en su propio nombre y en representación de la menor **MARÍA JOSÉ MARTÍNEZ LOPEZ**, **LINA MARÍA LÓPEZ** (Compañera), identificada con cédula de ciudadanía No. 31.792.875 de Tuluá, quien actúa en su propio nombre y en representación de la menor **NATALIA GONZÁLEZ LÓPEZ** (Hija de Crianza), **MARÍA CIELO ARIAS ACEVEDO** (Madre), identificada con cédula de ciudadanía No. 31.186.491 de Tuluá, **CARMEN EUGENIA ARIAS ACEVEDO** (Hermana), identificada con cédula de ciudadanía No. 1.116.243.16 de Tuluá, **MARÍA AURELIA MARTÍNEZ ARIAS** (Hermana), identificada con cédula de ciudadanía No. 38.793.966 de Tuluá, quien actúa en su propio nombre y en representación de las menores **LINA VANESSA AGUIRRE MARTÍNEZ** y **MARLYN MERCEDES AGUIRRE MARTÍNEZ**, **FRANCISCO MARTÍNEZ ARIAS** (Hermano) identificado con cédula de ciudadanía No. 94.152.422 de Tuluá, **JOSÉ ABAD MARTÍNEZ ARIAS** (Hermano) identificado con cédula de ciudadanía No. 94.394.183 de Tuluá.

PARIENTES DE VÍCTOR MANUEL SÁNCHEZ ZAPATA

GLORIA IRENE UNAS RIVERA identificada con cédula de ciudadanía No. 1.114.058.431 de San Pedro – Valle del Cauca, quien actúa en representación de la menor **MANUELA SÁNCHEZ UNAS** (Hija del señor **VÍCTOR MANUEL SÁNCHEZ ZAPATA**).

Por medio del presente escrito acudo a usted con el fin de instaurar medio de control de Reparación Directa en contra de la Nación – Fiscalía General de la

Nación y Nación – Rama Judicial, representada por el Director Ejecutivo de Administración Judicial.

DECLARACIONES Y CONDENAS

Primero. DECLARAR que la Nación – Rama Judicial y la Nación – Fiscalía General de la Nación, son responsables administrativamente por los perjuicios patrimoniales y extrapatrimoniales o inmateriales causados a los señores **JOSÉ ALBERTO MARTÍNEZ ARIAS**, quien actúa en su propio nombre y en representación de la menor **MARÍA JOSÉ MARTÍNEZ LOPEZ**, **LINA MARÍA LÓPEZ** (Compañera), quien actúa en su propio nombre y en representación de la menor **NATALIA GONZÁLEZ LÓPEZ** (Hija de Crianza), **MARÍA CIELO ARIAS ACEVEDO** (Madre), **CARMEN EUGENIA ARIAS ACEVEDO** (Hermana), **MARÍA AURELIA MARTÍNEZ ARIAS** (Hermana), quien actúa en su propio nombre y en representación de las menores **LINA VANESSA AGUIRRE MARTÍNEZ** y **MARLYN MERCEDES AGUIRRE MARTÍNEZ** (Sobrinas), **FRANCISCO MARTÍNEZ ARIAS** (Hermano), **JOSÉ ABAD MARTÍNEZ** (Hermano), producto de la detención injusta e ilegítima que sufriera el señor **JOSÉ HUMBERTO MARTÍNEZ ARIAS** por la conducta punible de **EXTORSIÓN AGRAVADA**.

Segundo. CONDENAR, en consecuencia a la anterior declaración a la Nación – Rama Judicial y la Nación – Fiscalía General de la Nación a pagar al señor **JOSÉ ALBERTO MARTÍNEZ ARIAS el equivalente a CIEN SALARIOS MÍNIMOS LEGALES MENSUALES VIGENTES (100 S.M.L.M.V) al momento del pago efectivo, más intereses e indexación, por perjuicios morales.**

Tercero. CONDENAR, en consecuencia a la anterior declaración a la Nación – Rama Judicial y la Nación – Fiscalía General de la Nación a pagar a la señora **LINA MARÍA LÓPEZ** (Compañera), quien actúa en su propio nombre y en representación de la menor **NATALIA GONZÁLEZ LÓPEZ** (Hija de Crianza), **MARÍA CIELO ARIAS ACEVEDO** (Madre), **CARMEN EUGENIA ARIAS ACEVEDO** (Hermana), **MARÍA AURELIA MARTÍNEZ ARIAS** (Hermana), quien actúa en su propio nombre y en representación de las menores **LINA VANESSA AGUIRRE MARTÍNEZ** y **MARLYN MERCEDES AGUIRRE MARTÍNEZ** (Sobrinas), **FRANCISCO MARTÍNEZ ARIAS** (Hermano), **JOSÉ ABAD MARTÍNEZ** (Hermano), **para cada uno de ellos el equivalente a CIEN SALARIOS MÍNIMOS LEGALES MENSUALES VIGENTES (100 S.M.L.M.V) al momento del pago efectivo, más intereses e indexación, por concepto de perjuicios morales.**

Cuarto. CONDENAR, en consecuencia a la anterior declaración a la NACIÓN – RAMA JUDICIAL y la NACIÓN – FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN, como reparación del daño antijurídico ocasionado a pagar al señor **JOSÉ ALBERTO MARTÍNEZ ARIAS**, la suma que resulte de cuantificar el tiempo que estuvo detenido por el punible de **EXTORSIÓN AGRAVADA**, por el salario mínimo al momento de ser liquidado, teniendo en cuenta que el señor **MARTÍNEZ ARIAS**, cuando fue detenido se dedicaba al comercio, más el veinticinco por ciento (25%) de las prestaciones sociales, debidamente indexados, por concepto de perjuicios materiales.

Quinto. CONDENAR, en consecuencia a la anterior declaración a la NACIÓN – RAMA JUDICIAL y la NACIÓN – FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN, como reparación del daño antijurídico ocasionado a pagar al señor JOSÉ ALBERTO MARTÍNEZ ARIAS, la suma el tiempo que se presume una persona tarda en conseguir trabajo con posterioridad a su salida de la cárcel¹, esto es, 8.75 meses multiplicado por el salario que devengaba para la fecha de su captura, es decir, un salario mínimo, debidamente indexada, por concepto de perjuicios materiales.

Sexto. DECLARAR que la Nación – Rama Judicial y la Nación – Fiscalía General de la Nación, son responsables administrativamente por los perjuicios patrimoniales y extrapatrimoniales o inmateriales causados a la menor MANUELA SÁNCHEZ UNAS, hija del señor VÍCTOR MANUEL SÁNCHEZ ZAPATA, producto de la detención injusta e ilegítima que sufriera éste por la conducta punible de EXTORSIÓN AGRAVADA.

Séptimo. CONDENAR, en consecuencia a la anterior declaración a la Nación – Rama Judicial y la Nación – Fiscalía General de la Nación a pagar a la menor MANUELA SÁNCHEZ UNAS, quien se encuentra representada por su señora madre GLORIA IRENE UNAS RIVERA, **el equivalente a CIEN SALARIOS MÍNIMOS LEGALES MENSUALES VIGENTES (100 S.M.L.M.V) al momento del pago efectivo, más intereses e indexación, por perjuicios morales.**

Octavo. La condena respectiva será indexada, actualizada de conformidad con lo previsto en el artículo 187 inciso final del C.C.A (Ley 1437 de 2011), aplicando en la liquidación la variación promedio mensual del índice de precios al consumidor, desde la fecha de ocurrencia de los hechos hasta la ejecutoria del correspondiente fallo definitivo y su pago efectivo por la entidad condenada y de conformidad con las fórmulas que para el efecto ha establecido o establezca el Honorable Consejo de Estado.

Noveno. Se condene en costas a la parte demandada conforme al artículo 188 de la Ley 1437 de 2011.

HECHOS Y OMISIONES

1. Los señores JOSÉ ALBERTO MARTÍNEZ ARIAS y VÍCTOR MANUEL SÁNCHEZ ZAPATA se han caracterizado por sus buenas relaciones familiares y sociales, laborando a su vez como comerciantes en el municipio de Tuluá – Valle del Cauca.
2. El día 7 de septiembre de 2011 fueron capturados en el municipio de Tuluá – Valle como presuntos autores del delito de extorsión agravada en la persona de MARÍA GLADIS GONZÁLEZ, siendo impuesta la medida de aseguramiento de detención preventiva en establecimiento carcelario.

¹ Al respecto ver: Consejo de Estado. Sección Tercera. Sentencia del 8 de junio de 2011. Expediente 19.502.

3. El día 8 de Septiembre de 2011 les fue concedido el beneficio de detención domiciliaria, medida que persistió hasta el 16 de noviembre de 2012, fecha en la cual quedó ejecutoriada la sentencia del 11 de octubre de 2012, proferida por el Honorable Tribunal Superior del Distrito Judicial de Buga Sala Penal, mediante la cual fueron absueltos de los cargos endilgados.

FUNDAMENTOS DE DERECHO DE LAS PRETENSIONES

DAÑO ANTIJURÍDICO COMO FUNDAMENTO DE LA RESPONSABILIDAD DEL ESTADO

De conformidad con el artículo 90 de la Constitución Política, el Estado responderá patrimonialmente por los daños antijurídicos causados por la acción u omisión de las autoridades públicas, que le sean imputables. En consecuencia, es necesario dilucidar en cada caso concreto si se configuran los elementos previstos en esta norma para que nazca el deber del Estado de responder, esto es, el daño antijurídico y la imputabilidad del mismo al demandado.

LA NACIÓN – FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN Y LA NACIÓN – RAMA JUDICIAL, con el actuar de sus funcionarios, incurrió en responsabilidad por lo que debe responder patrimonialmente al serle imputable el daño antijurídico que los señores JOSÉ ALBERTO MARTÍNEZ ARIAS y VÍCTOR MANUEL SÁNCHEZ ZAPATA y su familia, no estaban en el deber jurídico de soportar, de conformidad con el artículo 90 de la Constitución Política de Colombia, artículo 140 del Código Contencioso Administrativo (Ley 1437 de 2011), la ley 270 de 1996 y demás normas concordantes y aplicables.

La posición actual del Honorable Consejo de Estado², acerca de la responsabilidad extracontractual del Estado por la privación injusta de la libertad teniendo en cuenta la aplicación del artículo 414 del Decreto 2700 de 1991 y la Ley 270 de 1996, es la siguiente:

“

(...)

² Sentencia del 25 de Febrero de 2009. Sección Tercera. M.P. Dr. Mauricio Fajardo Gómez. Demandante: Edgar Antonio Silva y Otros. Expediente: 25000232600019981585101.

2.4. – Sobre la responsabilidad extracontractual del Estado derivada de la privación de la libertad a la cual es sometido el sindicado en cuyo favor, posteriormente, se profiere sentencia absolutoria o pronunciamiento judicial equivalente a ella.

2.4.1. – Responsabilidad del Estado por la privación de la libertad de las personas al amparo de la vigencia del artículo 414 del derogado Código de Procedimiento Penal.

La Sala, en relación con la responsabilidad del Estado derivada de la privación de la libertad de las personas, dispuesta como medida de aseguramiento dentro de un proceso penal, no ha sostenido un criterio uniforme cuando se ha ocupado de interpretar y aplicar el artículo 414 del Código de Procedimiento Penal³. En efecto, la jurisprudencia se ha desarrollado en cuatro distintas direcciones, como en anteriores oportunidades se ha sido puesto de presente⁴.

En una primera etapa la Sala sostuvo que la responsabilidad del Estado por la privación injusta de la libertad de las personas se fundamentaba en el error judicial que se produce como consecuencia de la violación del deber que tiene toda autoridad judicial de proferir sus resoluciones conforme a derecho, previa una valoración seria y razonable de las distintas circunstancias del caso y sin que resultare relevante el estudio de la conducta del juez o magistrado a efecto de establecer si la misma estuvo caracterizada por la culpa o el dolo⁵. Bajo este criterio, la medida de aseguramiento consistente en detención preventiva se tenía como una carga que todas las personas debían soportar⁶.

Más adelante, en una segunda dirección, la carga procesal de demostrar el carácter injusto de la detención con el fin de obtener la indemnización de los correspondientes perjuicios –carga consistente en la necesidad de probar la existencia de un error de la autoridad jurisdiccional al ordenar la medida privativa de la libertad– fue reducida solamente a aquellos casos diferentes de los

³ El tenor literal del precepto en cuestión es el siguiente: “Artículo 414. Indemnización por privación injusta de la libertad. Quien haya sido privado injustamente de la libertad podrá demandar al Estado indemnización de perjuicios. Quien haya sido exonerado por sentencia absolutoria definitiva o su equivalente porque el hecho no existió, el sindicado no lo cometió, o la conducta no constituía hecho punible, tendrá derecho a ser indemnizado por la detención preventiva que le hubiere sido impuesta siempre que no haya causado la misma por dolo o culpa grave”.

⁴ Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 4 de diciembre de 2006, expediente: 13.168; Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 2 de mayo de 2007, expediente No. 15.463.

⁵ Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 30 de junio de 1994, expediente número 9734.

⁶ Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 25 de julio de 1994, expediente 8.666.

contemplados en el artículo 414 del Código de Procedimiento Penal⁷, pues en relación con los tres eventos señalados en esa norma se estimó que la ley había calificado de antemano que se estaba en presencia de una detención injusta⁸, lo cual se equiparaba a un tipo de responsabilidad objetiva, en la medida en que no era necesario acreditar la existencia de una falla del servicio⁹.

En tercer término, tras reiterar el carácter injusto dado por la ley a aquellos casos enmarcados dentro de los tres supuestos previstos en el artículo 414 del Código de Procedimiento Penal, la Sala añadió la precisión de acuerdo con la cual el fundamento del compromiso para la responsabilidad del Estado en estos tres supuestos no es la antijuridicidad de la conducta del agente del Estado, sino la antijuridicidad del daño sufrido por la víctima, en tanto que ésta no tiene la obligación jurídica de soportarlo¹⁰, reiterando que ello es así independientemente de la legalidad o ilegalidad del acto o de la actuación estatal o de que la conducta del agente del Estado causante del daño hubiere sido dolosa o culposa¹¹.

Finalmente y en un cuarto momento, la Sala amplió la posibilidad de que se pueda declarar la responsabilidad del Estado por el hecho de la detención preventiva de ciudadanos ordenada por autoridad competente a aquellos eventos en los cuales se causa al individuo un daño antijurídico aunque el mismo se derive de la aplicación dentro del proceso penal respectivo del principio in dubio pro reo, de manera tal que no obstante haberse producido la privación de la libertad como resultado de la actividad investigativa correctamente adelantada por la autoridad competente e incluso habiendo sido proferida la medida de aseguramiento con el

⁷ Otros casos de detención injusta, distintos de los tres previstos en el artículo 414 del Código de Procedimiento Penal, podrían ser, por vía de ejemplo, los siguientes: detención por delitos cuya acción se encuentra prescrita; detención por un delito que la legislación sustrae de tal medida de aseguramiento; detención en un proceso promovido de oficio, cuando el respectivo delito exige querrela de parte para el ejercicio de la acción penal, etc.

⁸ Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 17 de noviembre de 1995, expediente 10.056.

⁹ Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 12 de diciembre de 1996, expediente 10.229.

¹⁰ Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 4 de abril de 2.002, expediente número 13.606.

¹¹ Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 27 de septiembre de 2000, expediente 11.601. En similar dirección, la Sala ha afirmado: “No puede considerarse, en principio, que el Estado deba responder siempre que cause inconvenientes a los particulares, en desarrollo de su función de administrar justicia; en efecto, la ley le permite a los fiscales y jueces adoptar determinadas decisiones, en el curso de los respectivos procesos, en aras de avanzar en el esclarecimiento de la verdad, y los ciudadanos deben soportar algunas de las incomodidades que tales decisiones les causen. Sin embargo, tampoco pueden hacerse afirmaciones categóricas, para suponer que, en determinados casos, será siempre inexistente el daño antijurídico, mucho menos cuando ha habido lugar a la privación de la libertad de una persona, así sea por corto tiempo, dado que se trata de la vulneración de un derecho fundamental, cuya injusticia, al margen de la licitud o ilicitud de la decisión que le sirvió de fundamento, puede hacerse evidente como consecuencia de una decisión definitiva de carácter absolutorio. He aquí la demostración de que la injusticia del perjuicio no se deriva de la ilicitud de la conducta del agente del Estado”. Cfr. Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 27 de septiembre de 2000, expediente 11.601. En línea similar también puede verse: Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 25 de enero de 2001, expediente 11.413.

llo de las exigencias legales el imputado no llega a ser condenado porque la investigación es dudosa e insuficiente para condenar el imputado, circunstancia que hace procedente el reconocimiento de la obligación, a cargo del Estado de indemnizar los perjuicios irrogados al particular, siempre que éste no se encuentre en el deber jurídico de soportarlos –cosa que puede ocurrir, por vía de ejemplo, cuando el hecho exclusivo y determinante de la víctima da lugar a que se profiera, en su contra, la medida de aseguramiento¹²—.

Las decisiones que han establecido que el Estado debe responder cuando se configure alguna de las causales del artículo 414 del C. de P. C., sin que sea necesario cuestionar la conducta del funcionario que impuso la respectiva medida de aseguramiento de privación de la libertad, incluso en los casos en que se ha absuelto al detenido por in dubio pro reo –todo bajo un régimen objetivo de responsabilidad– han estado fundamentadas en la primacía del derecho fundamental a la libertad, la cual debe ser garantizada en un Estado Social de Derecho como lo es el Estado Colombiano por virtud de lo dispuesto en la Constitución Política. En relación con este aspecto, la Sala, en sentencia proferida el 4 de diciembre de 2006, precisó:

“Lo cierto es que cualquiera que sea la escala de valores que individualmente se defienda, la libertad personal ocupa un lugar de primer orden en una sociedad que se precie de ser justa y democrática. Por consiguiente, mal puede afirmarse que experimentar la pérdida de un ingrediente fundamental para la realización de todo proyecto de vida, pueda considerarse como una carga pública normal, inherente al hecho de vivir dentro de una comunidad jurídicamente organizada y a la circunstancia de ser un sujeto solidario. Si se quiere ser coherente con el postulado de acuerdo con el cual, en un Estado Social y Democrático de Derecho la persona —junto con todo lo que a ella es inherente— ocupa un lugar central, es la razón de la existencia de aquél y a su servicio se hallan todas las instituciones que se integran en el aparato estatal, carece de asidero jurídico sostener que los individuos deban soportar toda suerte de sacrificios, sin compensación alguna, por la única razón de que resultan necesarios para posibilitar el adecuado ejercicio de sus funciones por las autoridades públicas ...

“Y es que si bien es cierto que en el ordenamiento jurídico colombiano la prevalencia del interés general constituye uno de los principios fundantes del Estado —a voces del artículo 1º in fine de la Constitución Política—, no lo es menos que el artículo 2º de la propia Carta eleva a la categoría de fin esencial de la organización estatal la protección de todas las personas residentes en Colombia en sus derechos y libertades. Ello implica que la procura o la materialización del interés general, no puede llevarse a cabo avasallando inopinada e irrestrictamente las libertades individuales, pues en la medida en que la salvaguarda de éstas forma parte, igualmente, del

¹² Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia del dos (2) de mayo de dos mil siete (2.007); Radicación No.:20001-23-31-000-3423-01; Expediente No. 15.463; Actor: Adiela Molina Torres y otros; Demandado: Nación– Rama Judicial.

contenido teleológico esencial con el que la Norma Fundamental programa y limita la actividad de los distintos órganos del Estado, esa protección de los derechos y libertades también acaba por convertirse en parte del interés general ...

“De ahí que los derechos fundamentales se configurasen como límites al poder¹³ y que, actualmente, se sostenga sin dubitación que el papel principal del Estado frente a los coasociados se contrae al reconocimiento de los derechos y libertades que les son inherentes y a ofrecer la protección requerida para su preservación y respeto¹⁴. No en vano ya desde la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, adoptada por la Asamblea Nacional Constituyente francesa el 26 de agosto de 1798¹⁵, en su artículo 2º, con toda rotundidad, se dejó consignado:

“«Artículo 2. El fin de toda asociación política es la conservación de los derechos naturales e imprescriptibles del hombre. Estos derechos son la libertad, la propiedad, la seguridad y la resistencia a la opresión» ...

“Después de la vida, el derecho a la libertad constituye fundamento y presupuesto indispensable para que sea posible el ejercicio de los demás derechos y garantías de los que es titular el individuo. No es gratuito que, en el catálogo de derechos fundamentales contenido en el Capítulo 1 del Título II de la Constitución Política, inmediatamente después de consagrar el derecho a la vida —artículos 11 y 12— se plasme el derecho a la libertad. La garantía de la libertad es, a no dudarlo, el principal rasgo distintivo entre las formas de Estado absolutistas, totalitarias y el Estado de Derecho.

“Todo lo expuesto impone, ineludiblemente, la máxima cautela antes de calificar cualquier limitación a la libertad, como una mera carga pública que los individuos deben soportar por el hecho de vivir en comunidad”.

Así las cosas, se tiene que el ordenamiento jurídico colombiano, orientado por la defensa de los derechos fundamentales de los ciudadanos, no puede escatimar esfuerzos en aras de garantizar la protección de dicho derecho, por tanto no se puede entender que los administrados estén obligados a soportar como una carga pública la privación de la libertad y que, en consecuencia, estén obligados a aceptar como un beneficio o una suerte que posteriormente la medida sea revocada. No, en los eventos en que ello ocurra y se configuren las causales previstas en el citado artículo 414 del C. de P. C., o incluso cuando se absuelva al detenido por in dubio pro reo –sin que opere como eximente de responsabilidad la culpa de la víctima– el Estado está llamado a indemnizar los perjuicios que

¹³ Sobre el punto, véase DE ASIS ROIG, Agustín, Las paradojas de los derechos fundamentales como límites al poder, Debate, Madrid, 1992; RODRÍGUEZ-TOUBES MUÑIZ, Joaquín, La razón de los derechos, Tecnos, Madrid, 1995.

¹⁴ SANTOFIMIO GAMBOA, Jaime Orlando, *Tratado de Derecho Administrativo, Tomo I, Introducción*, Universidad Externado de Colombia, Bogotá, D.C., 2003, p. 375.

¹⁵ Se toma la cita de la transcripción que del texto de la Declaración efectúa FIORAVANTI, Maurizio, *Los derechos fundamentales...*, cit., p. 139.

hubiere causado por razón de la imposición de una medida de detención preventiva que lo privó del ejercicio del derecho fundamental a la libertad, pues esa es una carga que ningún ciudadano está obligado a soportar por el sólo hecho de vivir en sociedad.

2.4.2. El régimen jurídico aplicable a la responsabilidad del Estado por el hecho de la privación de la libertad ordenada por autoridad competente, tras la entrada en vigencia de la Ley 270 de 1.996.

El presente proceso ofrece la particularidad de que durante el lapso en el cual tuvo lugar la privación de la libertad de los señores Edagar Borja, Ismael Cruz, Juan Carlos Hidalgo y José Robinson Silva ocurrió un tránsito de legislación en cuanto tiene que ver con la regulación que, a nivel de derecho positivo, se efectúa de la responsabilidad del Estado derivada de la detención preventiva ordenada dentro de una investigación penal.

Es así cómo la Ley 270 de 1996, Estatutaria de la Administración de Justicia –la cual entró en vigencia el 15 de marzo del citado año–, norma que regía cuando los señores antes mencionados fueron dejados en libertad, contiene unas disposiciones relacionadas con el tema que vendrían, en principio, a sustituir la regulación del mismo efectuada por el antes aludido artículo 414 del Decreto Ley 2700 de 1991, norma que se encontraba vigente al momento en que los señores antes citados fueron privados de la libertad.

La Sala, en sentencia del 2 de mayo de 2001¹⁶, analizó la circunstancia anterior y definió la incidencia que la nueva normativa podía generar frente a la responsabilidad que se le imputa al Estado por la declaración injusta de la libertad, precisando que sobre el particular podrían adoptarse dos posturas.

La primera, señalaría que el referido artículo 414 del Decreto ley 2700 de 1991 puede entenderse procedente por la potísima razón de que la medida de aseguramiento fue dictada en plena vigencia de la norma en cuestión, la cual habría de regir por tanto con efecto retrospectivo para las situaciones jurídicas surgidas durante la época en la cual estuvo en vigor el precepto anotado, independientemente de que éste hubiere sido derogado mientras transcurría el período de pervivencia en el tiempo de dichas situaciones jurídicas, tal como ocurrió en el supuesto sub examine.

¹⁶ Sentencia del 2 de mayo de 2001, expediente: 15.463

La segunda, indicaría que el presente asunto debería ser resuelto al amparo de lo establecido por la Ley 270 de 1996, en virtud del principio enunciado en el artículo 2° de la Ley 153 de 1887, de acuerdo con el cual la ley posterior en el tiempo prefiere, en su aplicación, a la anterior. Sin embargo, tras constatar el contenido de los artículos 38 y 40 de la Ley 153 de 1887, los cuales prevén parámetros para resolver conflictos de leyes en materia contractual, el primero y entre normas de naturaleza procedimental, el segundo, se debe decir que dichas disposiciones no tienen aplicación en este caso, porque el asunto que se somete a consideración de la Sala y que se rige por las disposiciones de la Ley 270 de 1996 no guarda relación alguna con el ámbito de la responsabilidad contractual ni mucho menos puede sostenerse que se trata de preceptos de naturaleza procedimental. Igualmente habría de tenerse en cuenta que el criterio de la especialidad normativa prevista en la Ley 153 tampoco permite resolver el conflicto, habida cuenta que tanto el artículo 414 del Decreto Ley 2700 de 1991, como los artículos 65 a 74 de la Ley 270 de 1996, en cuanto tienen que ver con la responsabilidad del Estado por el hecho de la “detención injusta”, regulan la misma materia.

Consecuencialmente, podría entenderse que el criterio que permite zanjar el asunto es el de la temporalidad, de acuerdo con el cual, como ya se ha dicho, procede resolver el caso con fundamento en la regulación contenida en la ley posterior, de suerte que el sub lite habría de fallarse a la luz de lo previsto por las disposiciones pertinentes de la Ley 270 de 1996. Esta Ley, por lo demás, tiene el carácter de Estatutaria, a lo cual se añaden las consideraciones de que bajo la vigencia de la nueva normatividad se formuló la demanda correspondiente, bajo el vigor de la misma se ha adelantado el juicio de responsabilidad en contra del Estado y, más importante aún, bajo la vigencia de dicha ley estatutaria se sucedieron en buena medida los hechos que sirven de fundamento a la demanda y bajo su imperio tuvo ocurrencia la consolidación del perjuicio cuya reparación se deprecia.

Para resolver el asunto es necesario remitirse al artículo 68 de la Ley 270 de 1996, según el cual quien haya sido privado injustamente de la libertad podrá demandar al Estado la correspondiente reparación de perjuicios. En relación con este precepto, sostuvo la Corte lo siguiente en la misma sentencia C-037 de 1996:

“Este artículo, en principio, no merece objeción alguna, pues su fundamento constitucional se encuentra en los artículos 6º, 28, 29 y 90 de la Carta. Con todo, conviene aclarar que el término “injustamente” se refiere a una

actuación abiertamente desproporcionada y violatoria de los procedimientos legales, de forma tal que se torne evidente que la privación de la libertad no ha sido ni apropiada, ni razonada ni conforme a derecho, sino abiertamente arbitraria. Si ello no fuese así, entonces se estaría permitiendo que en todos los casos en que una persona fuese privada de su libertad y considerase en forma subjetiva, aún de mala fe, que su detención es injusta, procedería en forma automática la reparación de los perjuicios, con grave lesión para el patrimonio del Estado, que es el común de todos los asociados. Por el contrario, la aplicabilidad de la norma que se examina y la consecuente declaración de la responsabilidad estatal a propósito de la administración de justicia, debe contemplarse dentro de los parámetros fijados y teniendo siempre en consideración el análisis razonable y proporcionado de las circunstancias en que se ha producido la detención.

“En virtud de lo anterior, y a propósito de lo explicado en torno al artículo 66 del presente proyecto, debe entenderse que es propio de la ley ordinaria definir el órgano competente y el procedimiento a seguir respecto de la responsabilidad proveniente del error judicial en que incurran las demás autoridades judiciales.

“Bajo estas condiciones, el artículo se declarará exequible” (subraya la Sala).

PRUEBAS

1. Oficiar al Juzgado Tercero Penal Municipal con Funciones de Conocimiento de Tuluá – Valle del Cauca, con el fin de que remitan copia íntegra y auténtica del proceso penal radicado bajo el número 2011-00259-00, que por el punible de Extorsión se siguió en contra de los señores JOSÉ ALBERTO MARTÍNEZ ARIAS y VÍCTOR MANUEL SÁNCHEZ ZAPATA.
2. Constancia de no conciliación expedida por la Procuradora 219 Judicial I Administrativo de la ciudad de Buenaventura – Valle del Cauca, donde se comprueba el agotamiento de la conciliación prejudicial como requisito de procedibilidad.

ANEXOS

Me permito acompañar los siguientes documentos:

1. Poderes legalmente conferidos.
2. Dos copias de la solicitud de conciliación prejudicial.

ESTIMACIÓN RAZONADA DE LA CUANTÍA

A) INDEMNIZACIÓN CAUSADA

1. POR PERJUICIOS MATERIALES

Los cuales comprenden el daño emergente y el lucro cesante.

PARA EL SEÑOR JOSÉ HUMBERTO MARTÍNEZ ARIAS

LUCRO CESANTE: tomando como fecha de la detención injusta de la libertad el 7 de septiembre de 2011 hasta la fecha en que quedó en libertad, esto es 12 de Octubre de 2012 y teniendo en cuenta que el señor **JOSÉ ALBERTO MARTÍNEZ ARIAS** se desempeñaba como comerciante y que al menos percibía un salario mínimo mensual, más el veinticinco por ciento (25%) de las prestaciones sociales, debidamente indexados.

Así mismo deberá condenarse a las demandadas al pago del tiempo que se presume una persona tarda en conseguir trabajo con posterioridad a su salida de la cárcel¹⁷, esto es, 8.75 meses multiplicado por el salario que devengaba para la fecha de su captura, es decir, al menos un salario mínimo, más el 25% de las prestaciones sociales, debidamente indexada, por concepto de perjuicios materiales.

2. POR PERJUICIOS EXTRAPATRIMONIALES – INMATERIALES

PARA EL SEÑOR JOSÉ ALBERTO MARTÍNEZ ARIAS

2.1. **PERJUICIOS MORALES:** Teniendo en cuenta la aflicción interna que sufrió al verse privado de la libertad sin ningún soporte jurídico válido y analizando la labor que ejercía y que el punible tenía estrecha relación con ésta en **CIEN SALARIOS MÍNIMOS LEGALES MENSUALES VIGENTES,** actualizados al día del pago, de conformidad con lo previsto en el artículo 178 del Código Contencioso Administrativo, mediante las fórmulas establecidos por el Honorable Consejo de Estado, esto porque el señor **JOSÉ ALBERTO MARTÍNEZ ARIAS**, no sólo fue privado injustamente de la libertad, sino que además, debió sufrir el largo proceso penal, con la consabida angustia de no saber qué podría suceder con su libertad, hasta que finalmente en el juicio oral, se resolvió declarar su **ABSOLUCIÓN**.

¹⁷ Al respecto ver: Consejo de Estado. Sección Tercera. Sentencia del 8 de junio de 2011. Expediente 19.502.

3. **PARA MARÍA JOSÉ MARTÍNEZ LÓPEZ, LINA MARÍA LÓPEZ** (Compañera), quien actúa en su propio nombre y en representación de la menor NATALIA GONZÁLEZ LÓPEZ (Hija de Crianza), MARÍA CIELO ARIAS ACEVEDO (Madre), CARMEN EUGENIA ARIAS ACEVEDO (Hermana), MARÍA AURELIA MARTÍNEZ ARIAS (Hermana), quien actúa en su propio nombre y en representación de las menores LINA VANESSA AGUIRRE MARTÍNEZ y MARLYN MERCEDES AGUIRRE MARTÍNEZ (Sobrinas), FRANCISCO MARTÍNEZ ARIAS (Hermano), JOSÉ ABAD MARTÍNEZ (Hermano), la suma equivalente a CIEN SALARIOS MÍNIMOS LEGALES MENSUALES VIGENTES (100 S.M.L.MV), debidamente indexados **para cada uno**.
4. **PARA la menor MANUELA SÁNCHEZ UNAS (Hija del señor Víctor Manuel Sánchez Zapata)**, la suma equivalente a CIEN SALARIOS MÍNIMOS LEGALES MENSUALES VIGENTES (100 S.M.L.MV), debidamente indexados.

NOTIFICACIONES

1. **DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL SECCIONAL CALI:** Carrera 5 No. 12-42 Piso 5, Teléfono: 8898721. dsajclinotif@cendoj.ramajudicial.gov.co.
2. **FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN SECCIONAL CALI:** Calle 10 No. 5-77 Piso 8 Edificio san Francisco Teléfono: 3927900 Cali – Valle del Cauca. dirfiscal@fiscalia.gov.co
3. **AGENCIA NACIONAL DE DEFENSA JURÍDICA DEL ESTADO:** Calle 70 No. 4-60 Teléfono: 2558955 Bogotá D.C. mesaayuda@defensajuridica.gov.co
4. **EL DEMANDANTE Y SU APODERADA JUDICIAL:** Carrera 3 No. 8-13 Edificio Caicedo Altos de Bancoomeva Oficina 202 Buenaventura – Valle del Cauca. Teléfono: 2421169-3003053760. Email: medusa323@hotmail.com.

Del Señor Juez.

Atentamente,

JULIANA ÁLVAREZ MUÑOZ

C.C. 41.948.710 de Armenia – Quindío

T.P. 189.178 del C.S.J.

Juliana Álvarez Muñoz

Abogada Especializada - Derecho Administrativo

